

Un alivio limitado

El resultado más relevante de las elecciones generales del pasado 23 de julio es el fracaso del proyecto, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, de un gobierno del Partido Popular en alianza con Vox. Dicha posibilidad carece de los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, a pesar de haber sido designado por el rey para intentar la investidura en las sesiones de los días 26 y 27 de septiembre.

Esa derrota ha sido el producto de una movilización de votantes de la izquierda, especialmente hacia el PSOE, pero también hacia Sumar. Ese voto ha tenido un objetivo político evidente, evitar el retroceso social que se adivinaba tras los programas del implícito frente de derechas. Ese deslizamiento de votos no ha provocado un vuelco electoral radical, pero ha bastado para frenar lo que parecía una inevitable victoria de Feijóo. La situación de equilibrio oscilante entre los bloques de votantes de izquierda y derecha se mantiene en líneas generales, como viene ocurriendo en los últimos años. Corresponde a las fuerzas nacionalistas, especialmente vascas y catalanas, romper ese empate entre bloques electorales en el Congreso de los Diputados.

Así, el resultado electoral revela una resistencia mayor de la esperada al proyecto reaccionario y los retrocesos que representaba. Por tanto, la primera sensación que se puede tener es de alivio porque, al menos provisionalmente, se ha alejado la amenaza de un gobierno de la derecha y la extrema derecha.

En este momento no hay seguridad de que se vaya a producir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Para ello necesitará los votos afirmativos de los partidos nacionalistas e independentistas de la cámara, incluidos los de Junts per Catalunya, la formación independentista de derechas dirigida por Carles Puigdemont. La conformación de una mesa del Congreso con mayoría de izquierdas (PSOE y Sumar) y la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, con una amplia mayoría, han mostrado que existe la posibilidad de investidura, aunque el camino hacia ella no será fácil. Tampoco es posible descartar que no se produzca, y en enero de 2024 nos encontremos ante unas nuevas elecciones generales.

La importancia del resultado del 23 de julio debe entenderse como un freno al creciente alineamiento del Partido Popular con posiciones reaccionarias y a sus mecanismos de actuación, cercanos a los utilizados por Donald Trump o por Jair Bolsonaro. Su creciente incorporación a los marcos conceptuales de la nueva extrema derecha le aleja de los partidos conservadores y liberales del entorno europeo. Primero Pablo Casado y ahora Feijóo han mostrado que su apuesta por llegar al poder no se frena ante los riesgos de degradación de las instituciones de la democracia electoral.

En Europa las nuevas extremas derechas están ganando posiciones. Presiden el gobierno de Italia, mostrando que su impulso no se limita al este de Europa. Son bastantes las fuerzas de esas características cuyo peso electoral y gubernamental aumenta, mientras desaparecen los *cordones sanitarios* establecidos frente a ellas. Estamos en un momento decisivo en el proceso de degradación de las democracias electorales representativas occidentales. Las elecciones presidenciales norteamericanas de 2024 adquieren en el actual contexto una importancia extrema. Cuando, además, hay un alto riesgo de avance de la extrema derecha en otros países europeos, como Francia.

La deriva hacia el espacio reaccionario del Partido Popular es un hecho singular en nuestro país. También hay que tener presente que, aunque Vox ha perdido bastante peso parlamentario, ha mantenido más de tres millones de votos. En cualquier caso, el bloque de la *derecha/extrema derecha* tiene en España rasgos más ultracatólicos y antifeministas, mientras sus componentes populistas son inferiores a los de otros países europeos.

Toda esta situación se produce después de que en las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo tuviera lugar un vuelco institucional de gran importancia. A pesar de que el resultado electoral también mostraba el equilibrio entre los bloques de la izquierda y la derecha, una escasa diferencia en votos y el hundimiento de Podemos provocaron que el peso institucional conseguido por el Partido Popular y Vox fuera suficiente para desalojar a la izquierda de numerosos ayuntamientos y de varias comunidades autónomas. Su efecto inmediato ha sido la conformación de gobiernos autonómicos con presencia de Vox en Aragón, Extremadura y Valencia, que se unen así a Castilla-León. En Baleares, el PP gobierna con el apoyo de Vox. Esta situación se repite en numerosos ayuntamientos grandes, medianos y pequeños.

Esos acuerdos se han manifestado, desde el primer momento, en el cuestionamiento de las políticas de igualdad y contra la violencia de género o en gestos contra la población LGTBI. También se ha abierto el camino a expresiones de negacionismo climático en consejerías autonómicas y en personas que están al frente de parlamentos autonómicos. El modelo de servicios públicos es otro objeto directo de las políticas del PP y Vox, fomentando la transferencia de recursos financieros hacia empresas privadas, especialmente en los sectores educativos y sanitarios, donde las comunidades autónomas ejercen plenas competencias. Además, la orientación de dichos gobiernos hacia un urbanismo desregulado y a una agricultura intensiva en agua, en un país aquejado de déficit de recursos hídricos, dibuja un escenario muy preocupante.

En estos momentos no sabemos si el gran poder autonómico y local conseguido por el PP y Vox será un ariete con el que conseguirán los apoyos sociales necesarios para alcanzar el gobierno de la nación si se produce una repetición electoral. Esa es una de las posibilidades. Aunque esos gobiernos de notorio perfil reaccionario pueden, alternativamente, generar una movilización de la ciudadanía ante la evidencia de unos proyectos cuyos efectos solo pueden ser negativos para la mayoría de la población.

El equilibrio electoral entre la izquierda y la derecha expresa una fuerte polarización social, donde la radicalización se está produciendo en la orilla derecha. En esos segmentos de nuestra sociedad están creciendo, especialmente entre varones, mucho más entre los jóvenes, pulsiones machistas, insolidarias, negacionistas del cambio climático, racistas, antivacunas, homófobas y transfóbicas, alimentadas desde la calle y desde las redes sociales, con el uso indiscriminado de bulos y opiniones sin fundamento.

En el resto de la población el efecto del 15M se ha diluido casi completamente. Sin embargo, son numerosas las personas que sienten preocupación por el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, creen necesarias políticas redistributivas para evitar que continúe creciendo la desigualdad social, alientan valores solidarios frente al acoso machista a las mujeres, defienden los derechos de las personas LGTBI. También se extiende la conciencia de la necesidad de actuar frente a los efectos del cambio climático.

Los estados de ánimo son importantes. Sin embargo, el alivio que hemos sentido ante el fracaso de Feijóo no debe llevar a conclusiones excesivamente optimistas. En primer lugar, si se produjera la investidura de Pedro Sánchez hay que tener presente que no hay mayoría parlamentaria de izquierdas. Sus políticas estarán condicionadas permanentemente por la necesidad de apoyos del PNV y de Junts, que harán imposible desarrollar una agenda social ambiciosa. En caso de producirse la investidura, el gobierno podría continuar rebajando la tensión en Cataluña. Sin embargo, la posibilidad de una solución a la cuestión nacional seguirá pendiente, como lo lleva en los dos últimos siglos, ya que no hay fuerzas suficientes para afrontar una orientación federal, posiblemente la única salida histórica que evitaría la repetición periódica de las confrontaciones entre el Estado y los territorios de Euskadi y Cataluña.

No hay señales, por otra parte, de un impulso de movilización popular hacia objetivos democratizadores y sociales. En esas condiciones, debemos ser realistas. Las fuerzas políticas de la izquierda carecen en este momento de alternativas estructurales para afrontar con decisión problemas como la desigualdad, el acceso a la vivienda, el combate radical contra la pobreza o la necesidad de democratización de las instituciones y de controlar el poder de las oligarquías económicas y las élites sociales. Sin un impulso fuerte desde abajo, nada cambiará sustancialmente.

No nos resulta, sin embargo, indiferente qué políticas se realicen desde el gobierno de la nación en los próximos años, pues sus acciones pueden mejorar o empeorar la situación, dirigiéndonos hacia sendas de mantenimiento de los derechos sociales o hacia el empeoramiento de la vida de la ciudadanía. Por eso sentimos alivio. No es indiferente que las instituciones públicas sean gobernadas de acuerdo con quienes niegan la existencia de violencia machista, pretenden eliminar instrumentos administrativos para la defensa de la igualdad o incluso cuestionan el derecho al aborto. Tampoco nos resultaría indiferente el acceso al gobierno de quienes defienden la desregulación del mercado laboral y pretenden anular las medidas adoptadas para limitar la precariedad, o favorecen una redistribución todavía más regresiva entre salarios y rentas empresariales y del capital, o intentarían dinamitar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

¿Se moverá algo en la sociedad? No lo sabemos, ni se trata de hacer predicciones. Los avances o retrocesos no son el producto mecánico de la actuación de los gobiernos. Dependen en mayor medida del desarrollo de la conciencia colectiva, de las opiniones mayoritarias de la gente, de la capacidad de movilización y organización, de la acción. La agenda para la lucha social existe. Se refiere a la lucha de las mujeres, a la lucha por los derechos LGTBI, a la lucha contra la pobreza, a la defensa de las condiciones de vida de asalariados y pensionistas y a la respuesta a las necesidades del cambio climático.

23 agosto 2023